

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el C. Jesus Hernandez, contra una orden del Gefe político de esa Capital, que lo condenó á quince días de obras públicas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que no aparecen probadas en este juicio las faltas que se dice cometió el quejoso Jesus Hernandez, por las cuales lo sentenció la Gefatura política á sufrir la pena de quince días de obras públicas, y en tal virtud resulta que con este procedimiento y el de tenerlo amagado todavía con prision, la Gefatura ha violado en la persona de Hernandez la garantía que le otorga á todo C. la 1ª parte del artículo 18, y última del 19 de la Constitucion general de la República.

Ninguna prueba aparece así mismo sobre la razon legal para haberle quitado la Gefatura política á Hernandez una pistola, la cual segun las constancias de autos no ha sido devuelta á su dueño, y con este procedimiento se ha violado la garantía que otorga el artículo 16 de la propia Carta fundamental. Respecto de la multa de cuarenta pesos impuesta á Hernandez, el Ministerio cree que no hubo violacion de garantías, en virtud de haber obrado la Gefatura política conforme al reglamento de Montepios fecha 8 de Marzo de 1870. Apoyado en estas razones el Fiscal que suscribe, pide al Juzgado, que si lo cree justo, se sirva pronunciar su fallo amparando á Jesus Hernandez contra los procedimientos de la Gefatura política, relativos al amago en que tiene de castigarlo en las obras públicas y al hecho de no haberle devuelto la pistola; no procediendo á ampararlo con respecto á la multa de 40 pesos que se le hizo efectiva.

Durango, Enero 27 de 1874.—Juan Nájera.

Es copia que certifico. Durango, Febrero 3 de 1874.—Juan Nájera.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, Febrero 3 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Jesus Hernandez, contra los procedimientos del C. Gefe político de esta Capital, exponiendo: que en virtud de una denuncia infundada, hecha en su contra, el C. Gefe político recogió algunos objetos y entre ellos, una pistola; que reclamada por el quejoso la referida pistola, se le obligó á dar multitud de vueltas inútiles, hasta que por último, el día 20 de Noviembre fue castigado con una prision arbitraria de quince días, habiendo ya antes sufrido una multa de cuarenta pesos, suponiendo un delito que no existia. Visto el informe de la autoridad ejecutara del acto reclamado, alegando que en virtud de los diversos datos que en contra del quejoso habia recibido la Gefatura política, sobre que sin permiso de la autoridad tenía establecida una casa de empeños en donde prestaba con el veinticinco por ciento, dieron lugar á que la misma Gefatura persuadida de la verdad de los hechos, procediera contra Hernandez imponiéndole una multa de cuarenta pesos. Que por otro parte, la misma Gefatura tenía pruebas mas que suficientes, de que el C. Jesus Hernandez mantenía relaciones estrechas con gente sospechosa y de mal vivir; y en esa virtud se le recogieron una pistola y un rifle que se encontraron entre multitud de prendas que tenia empeñadas, mandando poner las referidas armas en riguroso depósito, hasta que presentara al legítimo dueño de ellas. Que habiendo indicado con ese carácter al C. Hipólito Sosa, la Gefatura mandó entregarle el rifle, dándole una orden para que recibiera la pistola que estaba depositada en poder del C. Ramon

Ochoa. Que tres meses después de pasado todo esto, volvió Hernandez á reclamar las armas referidas. A lo que se le contestó, que ya habian sido entregadas á la persona que habia designado como dueño de ellas, bastando esta sola circunstancia para que el quejoso se desatara en insultos contra la autoridad. Que por esta causa, la Gefatura le impuso la pena de quince dias de obras públicas, causando de la facultad que le concede la fraccion 3ª del art. 13 de la ley particular del Estado, dada en 15 de Mayo de 1863. Visto el pedimento fiscal y los fundamentos en que se apoyas.

Considerando: que á pesar de haberse pedido á la Gefatura política informe con justificación, no ha ministrado los datos que acrediten las faltas y hechos que se atribuyen al C. Jesus Hernandez; que en consecuencia, todas las penas y procedimientos que se han empleado en contra del quejoso, han sido con violacion flagrante de las garantías otorgadas por la Constitución general de la República, en sus arts. 16 y 18.

Que por otra parte, aun suponiendo ciertos los hechos que se atribuyen á Hernandez, la aplicacion de una pena corporal, como es la prision de quince dias con destino á obras públicas, es propiamente de la autoridad judicial, segun lo previene el art. 21 de la misma Constitución, no obstante las disposiciones en contrario que pueda haber en las leyes particulares de los Estados.

En vista de tales fundamentos y cuanto mas, por convino, el C. Juez de Distrito Lic. Gerónimo Sida, dijo, que debia declarar y declara: 1º, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Jesus Hernandez, contra los procedimientos en cuya virtud fué sentenciado á sufrir la pena de quince dias de obras públicas, y aun sigue amagado con prision; 2º, contra el acto por el que se le recojió una pistola, que segun constancias de autos, aun no le ha sido devuelta; 3º, contra los procedimientos por los que se le impuso una multa de cuarenta pesos sin causa legal acreditada.

Remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision, y sáquense las copias correspondientes para la redaccion del Semanario Judicial. Y por este acto juzgando en definitiva, así lo provió, mandó y firmó el expresado C. Juez de Distrito, por ante mí. Doy fé.—Gerónimo Sida, una rúbrica.—Juan B. Arellano, secretario, una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Febrero 3 de 1874.—Juan B. Arellano, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 19 de Febrero de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Jesus Hernandez, ante el Juzgado de Distrito de Durango, contra una Orden del C. Gefe político de esta Capital, que lo condenó á quince dias de obras públicas; lo informado por la autoridad responsable; las pruebas rendidas; el pedimento fiscal; el fallo del inferior; y considerando: que el Gefe político no tuvo autoridad alguna para imponer al quejoso la pena de quince dias de obras públicas, y que semejante determinación infringe el artículo 21 de la Constitución federal; que la Orden de prision sin el requisito que previene el artículo 16 de la misma Constitución, implica la violacion de otra garantía individual en la persona de Hernandez; que el C. Gefe político no se ha extralimitado en sus facultades con la imposición de la multa, porque á ello lo autoriza el Reglamento de Montepios de 8 de Marzo de 1870 y el preceptado artículo 21 de la Carta federal.

Con fundamento del artículo 101 de la Constitución, se declara: que se reforma la sentencia del Juez de Distrito en estos terminos: la Justicia de la Union ampara y protege al C. Jesus Hernandez, contra la Orden de prision dada por el Gefe político y contra su condenacion á obras públicas; 2º: la

Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Jesus Hernandez, contra la imposicion de la multa, por violacion del Reglamento de Montepios.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos en la primera parte y por mayoría en la segunda, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Catañeda y Nájera.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Abril de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor.

COMPETENCIA

Suscitada por el Juez de 1ª instancia de Calpulalpam al 3º de lo civil de México, para conocer de la demanda que el Lic. D. Manuel Siliceo, como apoderado del Lic. D. Vicente Gomez Parada, ha entablado contra la Sra. Dª Gerarda Pardo Pavion sobre pago de honorarios.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice: que el Juzgado de 1ª instancia de Calpulalpam ha iniciado competencia al 3º de lo civil de esta Capital, para conocer del juicio que el Lic. D. Manuel Siliceo en representacion del de igual profesion D. Vicente Gomez Parada, ha promo-

TOMO V.—PÁTE II.

vido á Dª Gerarda Pardo de Pavion sobre pago de honorarios.

El suscrito al examinar los informes de los jueces respectivos, encuentra, que el Juez de Calpulalpam sostiene su jurisdiccion con el carácter de Juez del domicilio de la Sra. demandada, y el domicilio se justifica con una informacion testimonial levantada ad hoc, y con el certificado del presidente del Ayuntamiento de Calpulalpam.

A su vez el Juez 3º de lo civil de México, pretendiendo que la demandada estaba avecinada en esta Capital cuando se instauró la demanda, y comprobando esa circunstancia con la copia de un instrumento de poder que la repetida Sra. Pardo otorgó á favor de su hermano el Lic. D. Emilio, ante el notario público Villalon, y en cuyo instrumento se dice, que la poderdante esta avecinada en México, con habitacion en la calle de Santa Teresa la Antigua número 11, llevando el expresado instrumento la fecha de 14 de Mayo del año próximo pasado, sostiene que él es el competente para conocer del juicio promovido por el Lic. Parada.

El suscrito, sin fijarse, porque no es del caso, en la circunstancia del domicilio, cree que lo mejor será en el presente caso, transcribir lo que á este respecto enseñan los autores de la Enciclopedia española de derecho y administracion, artículo abogado, tomo 1º página 130, en donde se lee: La naturaleza de esta accion es sumaria, rápida y ejecutiva, porque siempre se han declarado los honorarios de los abogados como alimentos, y por consiguiente la accion que las leyes han concedido para reclamarlos, debia participar de la condicion misma que caracteriza las que se conceden á los alimentistas.

¿Y ante que tribunales debe deducir el abogado su demanda? En principio y por regla general, ante el mismo que ha conocido del pleito ó de las actuaciones, cuyos emolumentos se reclaman; mas para determinar con la debida exactitud la doctrina admitida en la práctica de los tribunales, conviene distinguir los casos que puejen